

C.A. de Santiago

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos autos RIT 16-2022, RUC N° 21000072933-4, del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de diecisiete de mayo del año en curso, se absolvió a **Juan Carlos López López** de la acusación de ser autor del delito previsto en el artículo 3 y penalizado en el artículo 13 de la Ley 17.798, ocurrido supuestamente en la comuna de Vitacura; y le **condenó** a la pena de **diez años y un día de presidio mayor en su grado medio**, más accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, a cumplir en forma efectiva por no concurrir los presupuestos legales para otorgarle alguna pena sustitutiva, en cuanto autor del delito de robo con intimidación consumado, ocurrido el día 23 de enero de 2021 en la comuna de Vitacura.

La misma sentencia, para los efectos del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, dejó constancia que López López no tiene abonos en la causa, ya que se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva desde el día 03 de mayo de 2021, en causa RIT 24-2022, RUC 2100434537-9, seguida ante el 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; y le eximió del pago de las costas.

En contra de esta decisión, la defensa dedujo recurso de nulidad por la causal prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, la que, por decisión de la Excma. Corte Suprema de veintinueve de junio pasado, fue reconducida a la prevista en la letra c) del artículo 374 del mismo cuerpo de leyes, remitiendo los antecedentes a este tribunal que lo conoció en la audiencia del día diecinueve de julio en curso, oportunidad en la que se escucharon los alegatos de la parte recurrente y del Ministerio Público, citando a los intervinientes para el día de hoy, a la audiencia de lectura de esta sentencia.



CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que la defensa señala que su representado se encuentra imputado por un hecho ocurrido el 23 de enero del 2021, por el cual fue formalizado con fecha 06 de julio del 2021, asignándosele en esa oportunidad defensor público que nunca se contactó con él; quien además se encontraba privado de libertad por otra causa.

El plazo de investigación desde la formalización hasta el cierre de la investigación fue tan solo de 23 días y en todo ese período el imputado no tuvo defensor de su confianza, careciendo de la posibilidad de aportar antecedentes.

Señala que él, como abogado defensor, asumió con fecha 29 de julio de 2021, y al día siguiente se tuvo presente tanto el patrocinio y poder y el cierre de la investigación, es decir, no pudo ejercer derechos que le corresponden en su calidad de imputado. Indica que inmediatamente solicitó copia de la carpeta investigativa, la cual fue concedida, pero que la entrevista en Santiago 1 con el imputado no se pudo realizar hasta el 20 de agosto de 2021, por cuarentena en el módulo correspondiente, es decir, 20 días después del cierre de la investigación.

Asimismo, hace presente que en la época de ocurrencia de los hechos que se le imputan, don Juan Carlos López López, se encontraba incapacitado y convaleciente en recuperación de un accidente automovilístico ocurrido en octubre de 2020, con fracturas de fémur y rotula derecha que le impedían desplazarse sin ayuda de bastones ortopédicos.

En resumen, postula que esta causal se justifica porque durante el procedimiento se infringieron garantías y principios tan básicos como el derecho a una adecuada defensa, igualdad ante la ley y a un debido proceso.

Sobre la preparación del recurso, señala que dio cumplimiento a dicha carga, alegando las infracciones ante el Juez de Garantía, quien rechazó la reposición y, por tratarse de una resolución que no admite apelación, ésta también fue rechazada, además de presentar



una cautela de garantías reclamando los mismos hechos, que también fue desestimada.

En consecuencia, considerando que el tribunal ha dictado sentencia con los antecedentes de una investigación sustanciada en absoluta indefensión del imputado, atendido que durante el procedimiento se infringieron garantías y principios tan básicos como el derecho a una adecuada defensa, igualdad ante la ley y derecho a un debido proceso, solicita se acoja el recurso y se declare nulo el juicio oral y la sentencia, retrotrayendo la causa a la etapa que este tribunal determine, conforme a derecho.

SEGUNDO. Que el artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: c) cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga.*

TERCERO. Que el derecho de defensa constituye una piedra angular del sistema procesal penal, al concebir al imputado como un sujeto de derechos dentro del proceso, amparado por la consideración estricta del principio de presunción de inocencia y comprende, de acuerdo a la consagración simplemente enunciativa del Código Procesal Penal, el derecho a ser oído, a ejercer adecuadamente su derecho a defenderse, a formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, controlando y controvertiendo la prueba de cargo y a probar los hechos que invoca para excluir o atenuar la reacción penal, garantías que se corresponden, además, con las contempladas en los artículos 14 N° 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8° N° 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en consecuencia, están incorporadas al ordenamiento jurídico interno a través del artículo 5° de la Constitución Política de la República.

CUARTO. Que, en lo pertinente al recurso, resulta útil tener en cuenta que una de las manifestaciones del derecho ya reseñado, está configurada por la obligación de proveer defensa técnica al imputado desde la primera audiencia a la que fuera citado (artículo 102 del Código Procesal Penal), así como la prerrogativa que se le concede al sujeto pasivo de la persecución penal de intervenir en el



procedimiento, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 93 c) del Código Procesal Penal, todo ello con miras a obtener su exclusión prematura de la investigación o a proveerse de elementos probatorios para el juicio oral. El conjunto de estas prescripciones tiene su adecuado correlato, a su vez, en el reconocimiento del defensor como un interviniente del proceso, de acuerdo a lo que establece el artículo 12 del código citado, cuya relevancia a los efectos de la legitimidad y validez del proceso penal queda en evidencia al advertir que el entorpecimiento en el ejercicio de los derechos que la ley le reconoce en la asistencia de su defendido, han sido elevados al carácter de motivo absoluto de nulidad.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo expresado en el recurso, en la especie se alega la inexistencia de contacto entre el imputado y su defensor designado por el tribunal durante el plazo de investigación, así como la imposibilidad de acceder al mismo imputado por parte de su defensor de confianza una vez cerrada la indagatoria, lo que le impidió ejercer los derechos que la ley le reconoce, ente ellos, la práctica de diligencias.

Sin embargo, la descripción de hechos que precede y que se ha estimado se subsume en el motivo de nulidad que esta Corte conoce, no exime al recurso propuesto, del cumplimiento de las cargas procesales correspondientes, como es la de probar los hechos que sustentan el motivo alegado, todo ello de acuerdo a lo establecido en el 359 del código adjetivo, desde que la impugnación se sustenta en presupuestos fácticos que deben ser acreditados para poder examinar su procedencia – como es la imposibilidad de acceder a la persona del imputado a tiempo para ejercer sus derechos en fase de investigación - al amparo de lo que dispone la norma citada, al ser insuficiente para ello las meras afirmaciones del recurso.

SEXTO: Que la omisión constatada priva a la nulidad pedida, de sustento, y determina su suerte. No obstante ello, resulta útil tener además en consideración que el citado estado de cosas, presuntamente vulneratorio de los derechos del condenado en la etapa previa al juicio, no impidió que su defensa ofreciera en sede de



audiencia de preparación de juicio oral, diversos medios probatorios, los cuales fueron aceptados, incorporados al auto de apertura respectivo y presentados al juicio oral, donde – sometidos al contradictorio- aportaron los elementos de convicción que fueron analizados por la sentencia en su mérito, y permitieron desechar la teoría del caso de la citada defensa.

SÉPTIMO: Que ya se ha fallado por los tribunales superiores de justicia, que el recurso de nulidad debe cumplir los mismos requisitos que gobiernan la nulidad procesal, de modo que para su procedencia, deben concurrir los presupuestos básicos de ésta, entre los cuales se encuentra el llamado “principio de trascendencia” que recoge el artículo 375 del Código Procesal Penal, en virtud del cual se ha sostenido que la transgresión que funde un recurso de esta naturaleza, debe constituir un atentado de tal entidad que importe un perjuicio real al litigante afectado que conduzca a la esterilidad de la garantía, resultando de ello un desconocimiento de su núcleo esencial, privándola de eficacia (SCS Rol 33.785-2017).

OCTAVO: Que, al amparo de lo señalado precedentemente, las circunstancias anotadas permiten desvirtuar los hechos que sustentan el motivo de invalidación en atención a que no es efectiva la indefensión alegada, lo que impone concluir que la causal ventilada no se configura en modo alguno en autos, por lo que procede desestimar el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado **Juan Carlos López López**, en contra de la sentencia de diecisiete de mayo del año en curso dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en los autos RIT 16-2022, RUC N° 21000072933-4, la que, en consecuencia, **no es nula**.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra Graciela Gómez Quitral.

Ingreso de Corte N ° 2917-2022



Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral e integrada, además, por la ministra Carolina S. Brengi Zunino y la abogado integrante señora Gloria Flores Durán. No firman la ministra señora Gómez Quitral y la abogada integrante señora Flores Durán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal y por ausencia, respectivamente.

En Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Proveído por la Presidenta de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintiocho de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>